



Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EXPTE. 38.110/2022**

**“NATURGY BAN SA c/ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS s/IMPUGNACION DE DEUDA”**

Sentencia Definitiva

En la Ciudad de Buenos Aires, reunidos los Señores Magistrados integrantes de la Sala Segunda de la Excm. Cámara Federal de la Seguridad Social, a fin de dictar pronunciamiento en la presente causa, se procede a emitir pronunciamiento:

**EL DOCTOR WALTER F. CARNOTA DIJO:**

Las presentes actuaciones llegan a conocimiento de la Sala en virtud de la impugnación presentada por NATURGY BAN SA contra la Resolución de AFIP N° 2485-E-2021 mediante la cual se rechazó un anterior cuestionamiento reclamando **diferencias en las contribuciones patronales con base en el Decreto 814/01** por la suma de \$ 18.369.184,52 ( comprensivo de \$ 5.805.328,80 en concepto de capital, \$ 5.696.583,54 por intereses y \$ 6.860.789,56 por multa) con fundamento en el artículo 16 de la Resolución General 1566 (t.o. 2010). por el periodo **07/2019 a 11/2019.**

La apelante **plantea la nulidad** de lo actuado en sede administrativa por falta de motivación y violación al derecho de defensa en juicio. Expresa que la falta de motivación del acta atacada se origina en la inobservancia del debido proceso adjetivo durante el procedimiento seguido por la Administración para arribar a una incorrecta determinación de deuda. También **afirma que no existe deuda pues, según expresa, su mandante es una sociedad anónima con participación estatal minoritaria, por pertenecer parte de sus acciones a la Anses, en los términos del art. 1º de la ley 22.016.** A su juicio su parte obró correctamente al aplicar la alícuota prevista en el art. art. 2º inc. b del decreto 814/01 sobre las contribuciones patronales motivo por el cual debe rectificarse el encuadre de la sanción punitiva impuesta y eliminarse los intereses resarcitorios.

**Corresponde proceder a la apertura** de la presente instancia judicial.

Ello por cuanto, si bien en nuestro derecho positivo la regla solve et repete ha sido considerada congruente con las garantías procesales que emanan del art. 18 de la C.N. y art. 8º del Pacto de San José de Costa Rica, pero tal imperativo legal podrá ser atenuado en aquellos casos en que existe una desproporcionada magnitud entre la suma reclamada y la concreta capacidad económica del contribuyente (CSJN 21/12/89 “Micrómnibus Barrancas de Belgrano” Fallo 312:2490; 11/06/98 “Cadesu Cooperativa de Trabajo Ltda.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

c/DGI” Fallo 312:1741; 02/08/05 “Centro Diagnóstico de Virus SRL c/AFIP” Fallo 328:2938 entre otros) admitiéndose la validez de la presentación de un seguro de caución en sustitución del depósito previo (CSJN 04/11/08 “Orígenes AFJP c/AFIP-DGI” Fallo 331:2480).

En el caso, el presentante acompañó **póliza de seguro de caución** N°584.706 emitido por Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros SA. por la suma de \$ 18.369.184,52 por lo que se procederá a la apertura de la presente instancia.

En cuanto al fondo, no advierto que lo actuado por los agentes fiscales resulte violatorio del art. 14 de la ley 19.549.

Ello por cuanto en nuestro ordenamiento jurídico los entes administrativos tienen amplias facultades de control y verificación sobre los particulares con el objeto de asegurar que efectúen, conforme a derecho, las cotizaciones al sistema de seguridad social con el objeto de asegurar a todos los habitantes los beneficios del sistema previsional instituido por las normas vigentes (conf. arts. 14 bis de nuestra Carta Magna, 6°, 7°, 10 y 11 de la ley 24.241).

Las diligencias que se cumplan con la intervención de los inspectores (con las facultades que les acuerda la normativa vigente) y que se instrumenta a través de las actas de verificación que se notifican al interpelado, no son más que constataciones de la situación del contribuyente, mediante la confección de “actas de infracción” sirviendo estas como intimación para el ingreso de los montos resultantes. Tal actuación es objeto de posterior revisión por parte del organismo y, eventualmente, sujeta a contralor judicial.

El referido sistema de control descansa sobre la base de las declaraciones efectuadas por los sujetos que deben actuar como agentes de retención y efectuar los aportes y contribuciones pertinentes al sistema previsional y fiscal (arts. 12, ley 24.241 y 11, ley 11.683) lo que autoriza a la AFIP a verificar la corrección de las declaraciones juradas presentadas y, en su caso, reclamar las diferencias patrimoniales que estima adeudadas incluso se la autoriza a imponer sanciones al contribuyente en caso de incumplimiento.

La presentante pretende la nulidad de lo actuado con argumentos procesales que no se compadecen con las constancias de autos, donde no surge que a la misma se le hubiera impedido ejercitar su derecho de defensa o privado de la posibilidad de agregar prueba o elementos de juicio que avalen su posición. En consecuencia corresponde la desestimación del agravio vertido en ese aspecto.

Como puede observarse no nos encontramos frente a actos administrativos que carezcan de causa o que impliquen el ejercicio de vías de hecho violatorias de





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

derecho de los particulares sino, ante el ejercicio legítimo de potestades que nuestra Constitución concede al Poder Ejecutivo para administrar el país y velar por el cumplimiento regular de las leyes sancionadas por el Congreso.

La cuestión a resolver se centra en determinar si la deuda intimada por diferencia de contribuciones patronales correspondientes al periodo 07/2019 a 11/2019 resultan conforme a derecho, o por el contrario la Administración Federal de Ingresos Públicos efectuó una incorrecta aplicación de la normativa vigente.

En el caso la apelante sostiene que abonó las alícuotas previstas por el art. 2º decreto 814/2001 por encontrarse, en su opinión, incluida entre las entidades y organismos comprendidos en el art. 1º de la ley 22.016.

Cabe tener presente que la ley 27.430, a través de su artículo 165 modificó el artículo 2º del Decreto 814/2001 al disponer con alcance general para los empleadores pertenecientes al sector privado una alícuota única del 19,5% correspondiente a las contribuciones patronales sobre la nómina salarial con destino a los subsistemas del Sistema Único de Seguridad Social aclarando que dicha alícuota será también de aplicación para las entidades y organismos comprendidos en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias, ya sea que pertenezcan al sector público o privado.

A posteriori el artículo 19 de la ley 27.541 vuelve a modificar dichos porcentajes estableciendo una alícuota del 20,40% para los empleadores pertenecientes al sector privado cuya actividad principal encuadre en sector servicios o en el sector comercio de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución N°220 de la Secretaría de Emprendedores de la Pequeña y Mediana Empresa y sus modificatorias siempre que sus ventas totales superen, en todos los casos, los límites por categorización como empresa mediana tramo 2 efectuado por el órgano pertinente, con excepción de los comprendidos en las leyes 23.551, 23.660, y 23.661. y un adicional del 18% para los restantes empleadores pertenecientes al sector privado no incluidos en el inciso anterior, alícuota que sería de aplicación a las entidades del sector público comprendidas en el artículo 1º de la ley 22.016 y sus modificatorias.

Por su parte, el artículo 1º de la ley 22.016 dispone la derogación de todas las normas de leyes nacionales, ya sean generales, especiales o estatutarias, en cuanto eximan o permitan capitalizar el pago de tributos nacionales, provinciales y municipales -impuestos, tasas y contribuciones- a las sociedades de economía mixta regidas por el decreto ley 15.349/46 ratificado por la ley 12.962, las empresas del Estado regidas por la ley 13.653 o por leyes especiales, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria regidas por la ley





## Poder Judicial de la Nación

### CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

19.550, “las sociedades anónimas con simple participación estatal regidas por la ley 19.550”, las sociedades del Estado reguladas por la ley 20.705, las empresas formadas por capitales particulares e inversiones de los fiscos nacional, provincial y municipal aunque presten servicios públicos-, los bancos y entidades financieras nacionales regidos por la ley 21.516 y/o por las leyes de su creación, según corresponda y todo otro organismo nacional, provincial y municipal que venda bienes o preste servicios a terceros a título oneroso.

Naturgy Ban SA es una sociedad anónima con participación estatal minoritaria -naturaleza admitida por el organismo de control- en virtud de la tenencia que detenta ANSES de sus acciones a raíz de lo dispuesto por la ley 26.425 (art. 18) atento la subrogación de dicho organismo en las obligaciones patrimoniales de los entes privados disueltos –AFJP- al quedar derogado el régimen de capitalización primigeniamente contemplado por la ley 24.241 lo que torna arbitraria la decisión administrativa que aquí se recurre (conf. crit. esta Cámara Sala I sent. del 19/05/2022 “Transener SA c/Administración Federal de Ingresos Públicos s/Impugnación de deuda”).

Por último y sobre el tema de los honorarios entiendo prudente destacar que la ley 27.423 no puede ser aplicada en autos en forma mecánica dado que dicho texto legal no contempla expresamente el proceso de impugnación de deuda. Ello así y teniendo presente lo expresado por el Superior Tribunal de la Nación en cuanto a que la regulación de honorarios no debe depender exclusivamente del monto del reclamo sino que deberá ser ponderada por los jueces, bajo pautas de razonabilidad, atendiendo a la naturaleza, complejidad del asunto, mérito de la causa, calidad, eficacia y extensión del trabajo realizado (Fallos 257:142; 296:126; 302:302:534 y sus citas; 320:495; 339:216 entre otros) y lo dispuesto por el artículo 1.255 del Código Civil y Comercial de la Nación se regulan los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte actora en 250 (\$3.733.250), conf. CSJN Ac. 09/2023. Con relación a los honorarios correspondientes a la representación letrada de la parte demandada, estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.

Por lo antes expuesto, propongo declarar habilitada la presente instancia revocando la resolución recurrida. **Imponer las costas en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión controvertida (art. 68 in fine CPCCN). Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$3.733.250).** Con respecto a los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423.





Poder Judicial de la Nación  
CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

**EL DOCTOR JUAN A. FANTINI ALBARENQUE DIJO:**

Adhiero al voto del Dr. Walter F. Carnota.

En virtud de lo expresado el Tribunal **RESUELVE:** 1º) Declarar habilitada la presente instancia judicial, 2º) Revocar la resolución recurrida, 3º) Imponer las costas en el orden causado atento la naturaleza de la cuestión controvertida (art. 68 in fine CPCCN), 4º) Regular los honorarios de representación letrada de la parte actora en 250 UMA (\$3.733.250). Con respecto a los correspondientes a la dirección letrada de la parte demandada estese a lo dispuesto en el artículo 2º de la ley 27.423. Regístrese, protocolícese, notifíquese, publíquese y, oportunamente, remítase.

LA DOCTORA NORA CARMEN DORADO NO VOTA POR ENCONTRARSE EN USO DE LICENCIA (art. 109 RJN).

JUAN FANTINI ALBARENQUE  
Juez de Cámara

WALTER F. CARNOTA  
Juez de Cámara Subrogante

Ante mí: AMANDA LUCIA PAWLOWSKI  
Secretaria de Cámara

ALP.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL – SALA 2

